



Información Migratoria Nacional

Refugio, para 3 mil 117



El Instituto Nacional de Migración (INM) tiene capacidad en albergues para alojar a refugiados de Ucrania y Rusia, además de personas de otros países.

Según un reporte del instituto, se cuenta con tres mil 117 espacios libres en los 57 albergues del país, lo que representa una disponibilidad de 53 por ciento. A febrero de 2022, se tenía una ocupación de 5 mil 824 alojados.

Hasta ahora los migrantes que ocupan los albergues son de Honduras (20 por ciento), Guatemala (19 por ciento), El Salvador (8 por ciento), Nicaragua (7 por ciento), Haití (4 por ciento), y otras nacionalidades distintas al Triángulo Norte (42 por ciento).

Hace unos meses, el titular del INM, Francisco Garduño, abrió las puertas a rusos y ucranianos que busquen refugio permanente ante un posible fenómeno migratorio que podría ser causado por un conflicto bélico entre ambas naciones.

Incluso, la Ley de Migración pone en un estatus de mayor relevancia el interés superior de la niñez, obligando al instituto que una vez que son puestos a disposición, éstos deberán ser canalizados, en el menor tiempo posible, a las instalaciones de asistencia social de los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia Estatales y Nacionales.

“Para tal efecto se creó la Guía de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en contexto de migración, la cual establece los procedimientos y acciones que el personal de INM deberá observar para la implementación de las citadas reformas, brindando certeza jurídica de su actuación”, indicó el INM en un documento enviado al Senado de la República.

De 2019 a la fecha, el Instituto Nacional de Migración ha conducido a 95 mil 175 menores a instalaciones de los sistemas DIF correspondientes, siendo la Procuraduría de Protección de menores la que resuelve su situación de estancia en el país. De igual forma, ha atendido a 138 mujeres embarazadas. [\(Misael Zavala, El Heraldo de México, País, p. 9\)](#)

Avanzan extranjeros a Chiapas tras el cierre de la oficina del INM



Centenares de migrantes han llegado en los últimos días a San Cristóbal de las Casas, en el suroriental estado mexicano de Chiapas, ante el cierre repentino de las oficinas de regularización migratoria de la ciudad fronteriza de Tapachula a raíz de varios altercados entre los extranjeros y las autoridades.

"Es muy triste porque nos agarran, nos detienen y entonces vamos a retornar. Ya no estoy pidiendo refugio porque es muy tardado, mi objetivo era llevar a mi nieto con su madre a los Estados Unidos, quien lleva viviendo 3 años allá", expresó a Efe Jacky Chacón.

La mujer hondureña, de 55 años, viajó desde su país junto con su nieto cruzando Guatemala hasta Tapachula, México, para solicitar una tarjeta por razones humanitarias que le permita transitar libremente y llegar a Estados Unidos.



Sin embargo, los trámites se complicaron en Tapachula por lo que decidió la semana pasada viajar hacia San Cristóbal de Las Casas, a unos 400 kilómetros.

En este municipio evaluaba este martes si regresar a Honduras o si todavía podría lograr algún tipo de permiso para su nieto y para ella misma.

TAPACHULA CIERRA OFICINAS

Este viernes, el Instituto Nacional de Migración (INM) anunció que se suspendía hasta nuevo aviso la atención de sus servicios en la oficina de regularización migratoria zona sur —ubicada en la ciudad fronteriza de Tapachula (Chiapas)—, debido a que cientos de migrantes intentaron ingresar al inmueble de forma violenta.

Esta decisión se produjo tras varios choques de un grupo de migrantes con las autoridades, donde llegaron a irrumpir en la sede del INM en Tapachula, una ciudad fronteriza con Guatemala en la que miles de migrantes han estado varados durante semanas e incluso meses.

Según constató Efe, este martes Tapachula amaneció en relativa calma, si bien un grupo de unos 200 migrantes evalúa si durante la semana saldrán en caravana apoyados por activistas, mientras que otros tantos se habrían movilizado ya hacia el norte.

UN ALBERGUE PARA DAR APOYO

Coincidiendo con la llegada de estos centenares de migrantes en San Cristóbal de las Casas, y a raíz del fenómeno migratorio creciente desde hace tiempo, varias instituciones inauguraron este martes un albergue en el que llevaban años trabajando para atender a solicitantes de asilo, refugiados y extranjeros. (EFE, Ovaciones, Nacional, p. 8)

AMLO: EU apoya a Ucrania y olvida a Centroamérica



Mientras el Congreso de Estados Unidos avaló en unos días recursos para apoyar a Ucrania, la propuesta hecha por el gobierno de México para impulsar el desarrollo en Centroamérica con programas como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en esa región, ya va para cuatro años y no se aprueba, criticó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sobre ello, dijo, dialogó con el secretario de Seguridad Nacional estadounidense, Alejandro Mayorkas, en la reunión que sostuvieron la semana pasada.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario expuso que México está ayudando a Centroamérica, pese a no tener suficientes recursos, por lo que ha exhortado a Washington a invertir.

Veía yo que lo que la cantidad que se aprobó para Ucrania, y lo digo con todo respeto, fue mucho mayor que la requerida para apoyar a las comunidades pobres de los países de Centroamérica y del Caribe. Entonces, de eso tratamos. La verdad, es muy buena la relación, pero hay mucha burocracia también allá; creo que el elefante ese está más grande y más reumático que el de nosotros, señaló.



Recordó que otro de los temas pendientes es el compromiso de regularización migratoria de los mexicanos que trabajan y viven honradamente en Estados Unidos. A ver, ¿por qué está detenida esa iniciativa en el Congreso? ¿Qué, no es importante? ¿Por qué no se aprueban los recursos para Centroamérica?, preguntó.

Luego de reiterar que ya no son los tiempos del plan Mérida, cuando Washington donaba a México helicópteros, aviones artillados o equipos bélicos, y en cambio ahora se pide una relación de cooperación para el desarrollo, López Obrador respondió a las recientes declaraciones del ex fiscal general estadounidense Bill Barr, quien sostuvo que su gobierno perdió el control del país.

Sobre las diferencias que se tienen, no sólo con la administración del vecino del norte, sino con gente de muchas partes del mundo y con el bloque conservador de México, expresó que todo esto que se resume en la frase de abrazos, no balazos, él (Barr) lo menciona. Y yo sostengo que no se puede enfrentar el problema de la inseguridad y la violencia sólo con medidas coercitivas.

Defendió que con esa política “estamos saliendo adelante, sin masacres, sin el ‘mátalos el caliente’, respetando los derechos humanos; con abrazos, no con balazos”.

Se refirió también a los hechos de violencia generados por la detención de Juan Gerardo Treviño Chávez, El Huevo, líder del cártel del Noreste. Aseguró que afortunadamente todo ha vuelto a la normalidad y hay calma en Nuevo Laredo.

[\(Néstor Jiménez y Fabiola Martínez, La Jornada, 8 Columnas\)](#)

[\(Arturo Páramo, Excélsior, Nacional, p. 2\)](#)

[\(Diana Benítez, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 34\)](#)

[\(Marco Fragoso, 24 Horas, México, p. 6\)](#)

[\(Reuters, El Economista, GeoPolítica, p. 43\)](#)

[\(Ricardo Moya, La Razón, México, p. 4\)](#)

[\(EFE, Opciones, Política, p. 3\)](#)

Con visa de trabajo temporal, 90% de los mexicanos víctimas de trata

La organización estadounidense Polaris informó que de 2007 a la fecha se tienen datos de 10 mil víctimas de trata de origen mexicanos en ese país.

Andrea Rojas, directora de la Iniciativa Estratégica contra la Trata Laboral, destacó que sólo entre 2015 y 2020 se registraron 4 mil 20 personas de origen mexicano afectadas, 90 por ciento de las cuales tenían visa de trabajo temporal.



Al participar en la mesa Diálogo sobre reclutamiento responsable en México (de trabajadores agrícolas, migrantes y otros), organizada por el Senado, expuso que en 2020, durante la pandemia, fueron 826 los connacionales con visas de trabajo afectados por ese delito en el país vecino, además de que subió de 20 a 34 por ciento la cifra de paisanos a los que negaron atención médica durante la emergencia sanitaria, y todos sufrieron algún tipo de fraude pese a contar con ese documento.

Insistió en que las visas temporales de trabajo pueden ser un mecanismo para migrar de manera regular, pero presentan fallas, lo que facilita el abuso y la trata de personas. Consideró que el sistema de reclutamiento es la forma más simple para perpetrar ese delito, ya que en los empleadores hay un profundo origen racista, no respetan el derecho a la sindicalización y mantienen a los trabajadores amenazados.

Precisó que la trata de personas mediante ese mecanismo se da porque hay “poca supervisión durante el proceso de contratación, ya que los trabajadores no saben quién es responsable de su empleo, lo que disminuye la responsabilidad de sus patrones.

Hay fraude, engaño, coerción y otros, que constituyen fallas sistémicas en el sistema de reclutamiento para laborar en Estados Unidos. Indicó que de acuerdo con datos de esa organización, 50 por ciento de los trabajadores temporales fueron engañados o coercionados por los reclutadores.

A su vez, Pedro Furtado Oliveira, de la Organización Internacional del Trabajo para México y Cuba, llamó a usar herramientas para proteger los derechos de los trabajadores migratorios en el corredor México-Guatemala, donde tratamos con los gobiernos local y federal, organizaciones de trabajadores, empresas y medios de comunicación para fomentar la contratación equitativa. [\(Víctor Ballinas, La Jornada, Política, p. 5\)](#)

Graves daños mentales y físicos en personas de la tercera edad deportadas

Luego de construir buena parte de su vida en Estados Unidos –donde trabajaron durante años sin tener documentos–, muchos migrantes mexicanos de la tercera edad son deportados al país, donde quedan separados del resto de su familia, en un fenómeno de aislamiento que puede afectar gravemente su salud física y emocional.



Así lo indicó la investigadora universitaria Verónica Montes de Oca, especialista en temas de senectud, quien es una de las organizadoras y participantes del foro Población, migración y envejecimiento, el cual se realizará mañana en Durango con actividades presenciales y con mesas de carácter virtual.

En entrevista con La Jornada, la coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez (Suiev), de la UNAM, explicó que el conversatorio busca analizar los efectos de la deportación en los connacionales que alcanzaron una edad avanzada en Estados Unidos y de pronto son enviados de regreso a México por las autoridades de aquel país.

“Hay familias trasnacionales que se han visto separadas por la deportación, debido a las políticas antimigrantes de Estados Unidos. Muchas personas – tanto hombres como mujeres– viven en el aislamiento, en municipios muy apartados, tras la experiencia de haber migrado con o sin documentos”, indicó la también académica del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.

Uno de los principales efectos de estas separaciones, expuso, ocurre en la salud mental de las personas de la tercera edad, quienes de repente se ven ante la imposibilidad de visitar a sus seres queridos por más de 10 o 15 años, y además se quedan sin los cuidados básicos que muchos de ellos requieren.

El foro se realizará hoy de 9 a 18:30 horas y puede seguirse a través de las redes sociales del Suiev. ([Fernando Camacho Servín, La Jornada, Política, p. 5](#))

Alistan modernización de frontera

La Cancillería, el jefe de la Unidad para América del Norte, Roberto Velasco, y el comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, Chris Magnus, acordaron ayer modernizar la infraestructura en la frontera entre México y Estados Unidos para hacer frente al tráfico de personas y buscar disminuir los flujos migratorios. (*Enrique Sánchez, Excélsior, Nacional, p. 14*)

Conflicto Ucrania-Rusia

México suma apoyos para la paz en Ucrania



En Nueva York, los 193 representantes de países integrantes de Naciones Unidas cuentan con el proyecto de resolución elaborado por México y Francia en el que se hace un nuevo llamado al cese al fuego por parte de Rusia en Ucrania y ello permita el inmediato ingreso de ayuda humanitaria.

La iniciativa podría llevarse a debate a partir de hoy en sesión extraordinaria de la Asamblea General.

Francia y México han estado trabajando con todos los miembros del Consejo de Seguridad durante las últimas dos semanas en un proyecto de resolución. Sin embargo, reconocemos que la situación sobre el terreno es muy cambiante y por lo tanto se necesita una acción rápida”, aseguró el representante de México ante Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente.

También nos ha contactado un gran número de Estados miembros del resto de la membresía de la ONU que han expresado su interés en participar a involucrarse en este esfuerzo para permitir que la comunidad internacional envíe un mensaje vigoroso”, agregó.



El documento, anunciado hace dos semanas por los embajadores Nicolas de Rivière y Juan Ramón de la Fuente, condena los ataques sistemáticos de Rusia contra ciudades densamente pobladas como Mariúpol, que han ocasionado la muerte de decenas de civiles, además de ataques a las caravanas de evacuación o de ayuda humanitaria.

Las consecuencias humanitarias de la actual agresión rusa son de una escala que la comunidad internacional no había visto en Europa en décadas”, señaló el borrador.

Este proyecto de resolución se sumaría al que se votó el 2 de marzo con 141 países a favor, entre ellos México, 5 en contra y 35 abstenciones, en el que se exige a las tropas rusas detener el bombardeo y permitir el ingreso de ayuda humanitaria.

Si bien Rusia tiene poder de veto en el Consejo de Seguridad, compuesto por 15 miembros, ningún país puede bloquear una resolución de la Asamblea General.

Las consecuencias humanitarias de la actual agresión rusa son de una escalada que la comunidad internacional no había visto en Europa en décadas”, agregó.

El diplomático mexicano reiteró que es momento de que toda la Asamblea General apoye esta iniciativa sobre acceso humanitario, el cese de hostilidades y el respeto al derecho internacional.

La Agencia de la ONU para los Refugiados informó que más de 3.5 millones de personas han huido de Ucrania desde el inicio de la invasión, el pasado 24 de febrero, de ellos más de 90% son mujeres y niños.

En lo que va de esta semana, salieron de Ucrania poco más de 67 mil personas.

Ayer, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, afirmó que la única salida ante la guerra es la vía diplomática.

La guerra en Ucrania no va a ninguna parte, pero va rápido. Se está intensificando, volviéndose más destructiva e impredecible a cada momento”.

Guterres recordó que la invasión viola la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y que ha causado “sufrimiento y destrucción atroces” en ciudades y poblados.

El mayor responsable de la agencia internacional denunció los bombardeos a hospitales, escuelas, edificios residenciales y refugios.

El pueblo ucraniano está soportando un infierno viviente, y las repercusiones se están sintiendo en todo el mundo con un aumento vertiginoso de los precios de los alimentos, la energía y los fertilizantes que amenaza con convertirse en una crisis mundial de hambre”, enfatizó Guterres.

HOY, GRUPO CON RUSIA

Hoy se prevé la instalación del Grupo de Amistad México-Rusia en la Cámara de Diputados.

El acto fue convocado por Alberto Anaya, legislador del PT, quien pospuso una semana la reunión a solicitud de la Junta de Coordinación Política.

La bancada de MC anunció el 11 de marzo que no participaría en ese grupo en tanto continúe la invasión rusa. Hace dos semanas, Morena y PT en San Lázaro le hicieron un desaire a la embajadora de Ucrania. ([Enrique Sánchez, Excelsior, 8 Columnas](#))

Información Migratoria de los Estados

Tamaulipas

Ronda Estatal



Más de 3 mil 500 migrantes llevan 1 año esperando que el nuevo albergue sea inaugurado en Reynosa. (Ronda Estatal, El Sol de México, República, p. 11)



Información Migratoria Internacional

Estados Unidos

Llega hija de mexicanos a la Corte de California

Los Ángeles.- La jueza de un tribunal de apelaciones de San Diego que es hija de migrantes mexicanos fue confirmada ayer como la primera latina en servir en la Suprema Corte de California.

La Comisión de Nombramientos Judiciales ratificó a la magistrada Patricia Guerrero en una votación de 3-0 para ocupar la vacante que dejó el año pasado el juez asociado Mariano-Florentino Cuéllar.

Guerrero, de 50 años de edad, creció en la región agrícola del Valle Imperial y ha trabajado como fiscal, socia de un bufete de abogados, jueza del tribunal superior y actualmente es parte del Tribunal de Apelaciones del 4to Distrito.

Será juramentada el lunes por el Gobernador Gavin Newsom, quien la nominó.

Guerrero, quien recibió elogios de colegas y miembros de un panel integrado por el Secretario estatal de Justicia, Rob Bonta, y la presidenta de la Suprema Corte, Tani Cantil-Sakauye, dijo que se siente honrada por la importancia histórica que tiene su ascenso.

Indicó que siempre contó con el apoyo de sus abuelos y padres, quienes migraron desde México para dar una mejor vida a sus hijos.

"Como he tratado de expresar, esto no trata sólo de mí, ni siquiera de mis padres, sino de muchos otros como nosotros", comentó Guerrero.

"Esta es una historia del sueño americano, de la creencia que con trabajo duro, perseverancia y oportunidades, todo es posible". (Ap, Reforma, Internacional, p. 14)

Seguridad

“Gobierno de México fracasa en garantizar seguridad”



El gobierno mexicano está “fracasando rotundamente” en la que debería ser la prioridad número uno: garantizar la paz y la tranquilidad de la población. En entrevista con EL UNIVERSAL, Craig A. Deare, profesor de Asuntos de Seguridad Nacional en la Universidad de Defensa Nacional en Estados Unidos, considera que “un México más seguro debería ser la transformación de la 4T”.

Autor de la publicación “Militarización a la AMLO: How bad can it get” (Militarización a la AMLO: Qué tan mal puede resultar”, publicada por el Instituto México del Wilson Center, y quien fuera oficial del ejército de Estados Unidos por 20 años, critica que a pesar de que varios presidentes mexicanos “se han visto forzados a usar las Fuerzas Armadas porque la policía, por corrupción, o porque está rebasada” no tiene la capacidad para enfrentar a los grupos del crimen organizado”, no se ha visto “un éxito, una victoria”.

Y en el caso del López Obrador, Deare alerta sobre el discurso de “abrazos, no balazos”, que minimiza la violencia que se encuentra a niveles insostenibles, incluyendo los asesinatos de periodistas, frente a los cuales la actitud del gobierno, asegura, es preocupante. México, advierte, tiene que trabajar para mejorar la confianza con Estados Unidos, un país que, reconoce, es corresponsable, más que por el tema de las armas, por la demanda de drogas.



P. Usted ha hablado de la militarización a la mexicana. ¿Por qué el distintivo? ¿Por qué es diferente de lo que sucede en otras regiones en Latinoamérica?

El caso de México es distinto de cualquier otro país de Latinoamérica, en parte por su cercanía geográfica con Estados Unidos, los retos que ha enfrentado con un vecino como nosotros, y por su propia historia. La independencia, la revolución... Todo eso tiene un componente fuerte de las Fuerzas Armadas...

Yo argumento que México siempre ha tenido grados de militarización, a veces más fuertes, a veces menos. Después de la revolución vemos que todos los presidentes eran generales revolucionarios, hasta Miguel Alemán... con el entendimiento de que Alemán los va a dejar en paz, y entramos en un periodo, entre 1946 y los 90, donde el PRI tiene una relación con el ejército y todos los presidentes, de manera mayor o menor, confían en el ejército, de mantener la paz, la tranquilidad, ya sea con los movimientos estudiantiles, o con los grupos insurgentes... Luego llega Vicente Fox, y su relación con el ejército fue muy distinta, no se confió. Incluso parte de su esfuerzo fue cambiar esa relación simbiótica entre el PRI y el ejército. Lo siguió utilizando pero mucho menos y sólo lo utilizó porque tuvo que hacerlo.

Y luego llega Felipe Calderón, con la guerra contra el narco, Enrique Peña Nieto, que trata de minimizar el uso de las Fuerzas Armadas pero se ve obligado a utilizarlas por la violencia, y lo más curioso, a mi juicio, es lo que pasa actualmente con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que en la campaña dijo que iba a regresar los ejércitos a los cuarteles, pero los está utilizando más que cualquier otro presidente en la memoria reciente. Incluso quizás más que Calderón, en cuanto a qué tareas se les da. Lo que me parece muy interesante es que un presidente que supuestamente tenía una relación no muy buena con las Fuerzas Armadas, sobre todo el ejército por cuestiones históricas, y a pesar de lo que dijo en la campaña, se ha reforzado en el ejército más que cualquier otro. Por eso digo a la mexicana. No es institucional ahora, como lo fue en los 70 años del PRI, pero aun así cada presidente los ha usado a su estilo.

No es que las Fuerzas Armadas estén buscando un mayor protagonismo. No es su deseo. Por eso, es a la mexicana y a la AMLO. Si el presidente les da una orden que no va con el rol de las Fuerzas Armadas, lo tienen que hacer. Las Fuerzas Armadas mexicanas son sumamente profesionales. Lo que les faltan son recursos.

P. ¿Y el caso de la Guardia Nacional?

Me parece interesante que tanto Fox, como Calderón, como Peña, como AMLO, en sus campañas todos dijeron que iban a fortalecer a la policía.



Lo que dice la literatura académica es que para confrontar ciertas amenazas, que no son de índole militar netamente, pero que también rebasan la capacidad de la policía, se requiere una fuerza intermedia. Los ejemplos clásicos son los europeos: la Guardia Nacional española, el Carabiniere italiano y la Gendarmerie Francesa. También se podría agregar los Carabineros de Chile, que era una fuerza con alguna especie de influencia militar, pero de carácter civil. No eran Fuerzas Armadas.

Lo interesante de la propuesta de AMLO en la campaña fue esto de la activación, de la operacionalización de la Guardia Nacional, pero de carácter civil. Pero en la actualidad no lo está haciendo. Incluso está la propuesta de ley para ubicarlos no en la secretaría de Seguridad Pública, sino de la Secretaría de la Defensa Nacional, que a mí me parece que no es la solución. Es la respuesta incorrecta al problema. Supongamos que no ha sido suficiente la cantidad de Fuerzas Armadas para plantar cara efectiva al crimen organizado. Entonces reforcemos a las Fuerzas Armadas, pero la Guardia Nacional no es eso. Si parte del desafío con el crimen organizado es que en algunos casos hay que utilizar la fuerza militar en contra de una agrupación grande, no se puede ir con una patrulla. Hay que ir con un pelotón, inclusive un batallón. Pensemos en el Culiacanazo y la mala planeación para realizarlo, pero reconociendo que Culiacán es un caso distinto por la fuerza del Cártel de Sinaloa.

Porque no son insurgentes, son criminales cuyo objetivo es el lucro; para ombatirlos no es con las Fuerzas Armadas, es con policía, con inteligencia, investigación, arrestos, juicios, mandarlos a la cárcel. Y ahí viene toda la cuestión de justicia, impunidad, etcétera. Esa es una carencia.

Se ha perdido en estos cuatro últimos sexenios la oportunidad de reconocer que si bien hay algunas cosas que deben y pueden hacer las Fuerzas Armadas, el meollo del asunto se debe resolver con la policía, policías que tengan la autoridad de investigar, arrestar, etc. Reconozco que por razones de la realidad mexicana las policías tienen fama de ser corruptas, pero la solución no es desaparecerlas, es crear mejores y fortalecerlas.

En gran medida, es el Estado el que no ha invertido en sus policías... ¿Cuánto les pagan? por eso tienen que robar, ser corruptos para sobrevivir.

P. Hablando de este uso del ejército para enfrentar al narco. La violencia no sólo no para, sino que cada vez es peor. ¿Cuál es su evaluación?



Si bien es cierto que varios presidentes se han visto forzados a usar las Fuerzas Armadas porque la policía, a cualquier nivel, federal, estatal, municipal, por corrupción, o porque está rebasada, sus capacidades no están para enfrentar a grandes grupos del crimen organizado, no hemos visto un éxito, no hemos visto una victoria o resultados que uno podría decir: 'parece que sí ya estamos teniendo éxito'.

¿Por qué es así? No sabemos. Podría ser, y esta analogía es muy pobre, pero la hago de todos modos: si uno está haciendo un experimento químico y agrega ciertas cosas, si no hay cantidades suficientes de varias cosas, el efecto deseado no se produce. Entonces, una posibilidad es que aunque se haya utilizado a las Fuerzas Armadas, no ha sido suficiente. Es decir: si entiendo bien, el gasto militar actual en México es de 0.6%. El promedio global es de 2.5%. El promedio regional es de 2%. El caso estadounidense es distinto por sus responsabilidades globales. Uno podría decir: si vamos a usar las Fuerzas Armadas, dotémoslas de capacidades suficientes para realmente hacer lo que tiene que hacer. Y no estoy diciendo que esa es la solución, de incrementar el pie de fuerza y sus capacidades materiales en cuanto a material, etc. Pero puede ser.

P. Últimamente lo que hemos visto en las noticias es el encarecimiento del precio del limón, la suspensión de la importación de aguacate mexicano en Estados Unidos. Todo ello, ligado a la violencia, a la presión del narcotráfico con productores mexicanos. En otras palabras, está afectando las cadenas de suministro.

¿Cómo se ve este problema desde Estados Unidos?

Es preocupante. Antes nos referíamos casi exclusivamente a narcotraficantes, o a cárteles, o a organizaciones de tráfico de drogas. Pero lo que hemos visto es que -y por eso el término que se usa ahora en Estados Unidos es el del crimen organizado transnacional, que ya no es sólo un peligro, una amenaza para un país específico, sino para una región, para no decir globalmente- el crimen organizado se fortalece cada vez más, nutrido quizá primordialmente por estos lucros de las drogas, pero ahora se han diversificado. Cualquier producto del que pueden obtener un lucro, mandándolo por contrabando, de manera ilegal, lo van a hacer: fruta, verdura, personas, animales, cigarros, lo que sea. La preocupación no es la política per se, sino la estrategia del gobierno actual -mexicano- de cómo tratar de solucionar el problema. Y sé que estoy sobresimplificando, pero esta cuestión de abrazos, no balazos, pues no. Entiendo que a la larga hay que reformar partes del Estado, de la sociedad, las instituciones, pero en el corto plazo, con el crimen organizado cada vez más fuerte, es responsabilidad del Estado atenderlo. Y no minimizarlo.



La violencia no ha crecido, pero no ha disminuido, se ha mantenido en un nivel que no es aceptable para la sociedad mexicana. Me parece que debería de haber una reacción y una discusión más seria sobre qué se puede hacer y el rol de Estados Unidos es de ser corresponsable. Por eso me gustó la Iniciativa Mérida. Su gran logro fue que Estados Unidos reconociera su corresponsabilidad en todo esto. Reconoció que la demanda nuestra es parte del problema.

Lo que es necesario es una mayor coordinación, entre nosotros, de este lado, entre ustedes de su lado, y entre los dos.

Hemos llegado a este acuerdo Bicentenario, y se ve muy lindo en el papel, pero dónde están los resultados.

P. ¿Existe cierta responsabilidad de parte de Estados Unidos en la violencia que existe en México? Se lo pregunto en el contexto de esta demanda que presentó el gobierno mexicano contra las armerías estadounidenses, señalando que las armas que se producen en Estados Unidos terminan en manos de los criminales y que tienen responsabilidad en ello.

Sí, incluso yo digo que la mayor responsabilidad que existe de parte no del gobierno estadounidense, sino de la sociedad estadounidense, es la demanda de drogas y de otros insumos ilegales. Sin la demanda nuestra, el exceso de oferta de cualquier cosa no sería problema. El fentanilo se quedaría en China, la cocaína se quedaría en Perú, Bolivia y Colombia. Es la demanda nuestra el motor que genera todo esto. Esa es la gran responsabilidad nuestra.

Es cierto que nuestras leyes, nuestra cultura con las armas, que es distinta a la de México, también es parte del problema. Pero supongamos que termina la Segunda Enmienda en Estados Unidos -que defiende el derecho a la posesión de armas- y que no se produce un arma adicional. ¿El crimen organizado no sería capaz de encontrar armas en otras partes? Obvio que sí. No minimizo el rol nuestro, y nuestras leyes en eso, y es parte. Pero no es el factor predominante. Para mí, el factor predominante es la demanda.

P. ¿Una solución sería la legalización de las drogas?



No estoy a favor del consumo de la droga per se, pero me parece que como sociedades globales, si regresamos al siglo 19, principios del siglo 20, la comunidad internacional a mi juicio erró al criminalizar el consumo de drogas en vez de tratarlo como una cuestión de salud pública. Y al criminalizar no sólo la producción y el tráfico, sino también el consumo, hemos creado esta realidad que existe de que los que producen y trafican droga, lo hacen con las características del mercado negro. Para ellos es mejor. Producen menos y ganan más. Hay costos adicionales en cuanto a seguridad y violencia, y tal. Pero el lucro es mayor. Reconociendo que habría efectos contraproducentes de segundo y tercer orden al legalizar las drogas, el argumento es que si el Estado los regula y es capaz de sacar impuestos y en vez de utilizar todo el dinero combatiéndolo, sino tratándolo como una cuestión de salud pública, quizás a la larga las sociedades evolucionen. Es probable que siempre habrá un cierto nivel de demanda, pero a la larga la cuestión es la educación.

P. Usted menciona la importancia de una mayor coordinación entre Estados Unidos y México. Pero uno de los factores que la complica es el que tengamos figuras de relevancia, como el caso del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, detenido en Estados Unidos por cargos relacionados con el narcotráfico. O lo que ocurrió con la detención del exsecretario de Defensa, Salvador Cienfuegos. ¿Existe el nivel de confianza necesario entre el gobierno de Estados Unidos y el de México para que se pueda dar un trabajo en equipo?

Es un desafío enorme. Hace falta mucho para que México desarrolle mecanismos en cada institución para empezar a generar esa confianza... Es un reto empezar a superar esa falta de confianza en los controles que tiene México. Sería un programa que tarda meses y años. Pero si asumimos que la demanda de nosotros no va a desaparecer, por lo menos en el corto y mediano plazo, y que el nivel de corrupción estructural en México está dónde está, ¿cuál actuación puede tomar el gobierno mexicano para empezar a reconocer eso y construir mecanismos para superarlo?

P. Hay un tema que no puedo dejar de mencionar porque está teniendo un impacto muy fuerte y porque está relacionado con la violencia de la que hablamos: los asesinatos de periodistas en México. Incluso ha habido reacciones de parte de senadores y autoridades estadounidenses. ¿Cómo se ve desde Estados Unidos lo que está ocurriendo y el discurso del gobierno mexicano?



No estoy hablando por el gobierno estadounidense, sino especulando en lo que la gente que tiene esa responsabilidad acá podría pensar. Y creo que está vinculado con la preocupación en general de la actitud del gobierno en cuanto a estas situaciones. Es sumamente preocupante que en vez de reconocer qué tan serio es el desafío de la inseguridad en México, el presidente y su equipo traten de minimizarlo... Me parece que parte de la Cuarta Transformación podría ser transformar a México en país más seguro. Regresarlo a una era donde regía la paz.

Quizás ahora ya es tarde, porque ya pasaron tres años -del gobierno de AMLO-, pero quizás el próximo candidato o candidata ponga la seguridad como un tema mayor y no diga que lo vamos a resolver con Fuerzas Armadas. Garantizar plenamente la paz y la tranquilidad, ese es el objetivo número uno de cualquier gobierno, y están fracasando rotundamente. Y minimizarlo a lo mejor tiene sus ventajas políticas, pero para la sociedad mexicana es terrible. Ese nivel de violencia e inseguridad es inaceptable. El presidente lucha y argumenta a favor de la sociedad menos próspera, pero son en cierto sentido los más afectados. El rico puede vivir detrás de rejas, o irse a Miami, a Houston. El pobre dónde va, no se puede mudar, cómo protege a su familia.

P. El discurso va además en el sentido de pintar a la prensa como el enemigo. ¿Cuál es el riesgo de usar este tipo de mensaje?

Es altamente preocupante. Hablo del caso estadounidense: a ningún presidente le gusta la crítica. Quisieran que los reportajes fueran maravillosos. Pero el rol del periodista es contar la realidad. Y el gobierno mexicano lo está tratando de minimizar. La responsabilidad del periodista es reportar críticamente lo que pasa. Es la entidad de la sociedad que se encarga de hacer que los gobernantes rindan cuentas... En Estados Unidos, todos los presidentes tienen que aguantar a la prensa. Si no te gusta la crítica de la prensa, no te metas a la vida pública, pero si eres presidente, gobernador, senador, esas son las reglas.

P. Analizando todo este panorama. ¿Ve algún escenario donde pudiera darse un viraje de estrategia del gobierno mexicano?

Todo es posible. A mí me sorprendería porque el presidente es como es. Me da la impresión de que él no piensa que está mal. Está convencido de que lo que está haciendo está bien. No sé qué hechos tendrían que presentarse para que él diga: he metido la pata.

Es posible, si los senadores de Morena, escuchando los argumentos de los demás partidos, y preocupados por la situación de seguridad dicen: caray, señor presidente, debemos cambiar algo. Veremos. [\(Guadalupe Galván, El Universal, P.p.\)](#)

Cooperan nueve zetas con EU para escabullirse de la cadena perpetua

Pactan contarlos todo y reducen sentencias en EU

En las cortes de Texas hay al menos mil 300 documentos contra integrantes de Los Zetas



Cabecillas de Los Zetas

En prisión en México



Miguel Ángel Treviño Morales



Omar Treviño Morales



Juan Carlos Sánchez Gaytán



Juan Antonio Carreón

FUENTE: Cortes de EU • INFORMACIÓN: Laura Sánchez Ley • GRÁFICO: Alfredo San Juan

Nueve miembros del Cártel de Los Zetas han estado “cooperando con todo” con el gobierno de Estados Unidos en la última década, sin embargo, a diferencia de otros cárteles, no lo han hecho con carretadas de dinero, sino con información que ha revelado las operaciones y los nombres de los miembros que integran la organización delictiva y sus escisiones.



MILENIO encontró que varios narcotraficantes y sicarios han aceptado acuerdos totales de cooperación con el Departamento de Justicia para evitar sentencias de por vida o de hasta 40 años, como ha pasado con otros integrantes del cártel. Han estado dispuestos a declararse culpables, ser testigos colaboradores y a ponerse a disposición en futuras acusaciones cuando el gobierno de ese país lo pida.

Debido a esta cooperación, los integrantes de Los Zetas han logrado sentencias de entre tres y 15 años, salvo un par de capos que obtuvieron disminuciones importantes pero aún así fueron condenados a 20 y 25 años de prisión.

El intercambio de información ha permitido que Estados Unidos continúe fincando cargos contra Los Zetas y sus escisiones, tal es el reciente caso de Juan Gerardo Treviño Chávez, El Huevo, líder de una de las células criminales del Cártel del Noroeste y quien fuera extraditado por México el pasado 14 de marzo.

La clave de estos nueve narcotraficantes para evadir la prisiones de por vida ha radicado en una figura llamada “fully cooperate” o acuerdo de cooperación total. Según los documentos revisados en tres circuitos federales de Estados Unidos, esto incluye no negarse a entregar los activos adquiridos derivados del tráfico de drogas sino también cooperación plena para proveer información para futuros juicios.

“Esto incluye información relacionada con cualquier actividad criminal que conozca el defendido incluido y no limitado con tráfico de drogas, crímenes violentos y lavado de dinero”, dice uno de los acuerdos a los que este diario tuvo acceso.

“El defendido acepta testificar con la verdad ante un gran jurado en otros procesos judiciales o administrativos cuando sea llamado por Estados Unidos. El defendido acepta voluntariamente entrevistas con el gobierno”, agrega.

Además, los acuerdos que han firmado Los Zetas incluyen entre sus cláusulas que, de presentarse ante cualquier autoridad del gobierno norteamericano con mentiras, derivará en un proceso en su contra por falsedad en declaraciones.

Otro punto en común entre estos nueve integrantes de Los Zetas, hoy testigos colaboradores del gobierno de Estados Unidos, es que llegaron ante una Corte Federal con problemas psiquiátricos, psicológicos y adicciones al alcohol y a las drogas, por lo que dentro de este acuerdo también han aceptado tratamientos de rehabilitación al interior de las prisiones donde han sido encarcelados.



Roberto Camacho y Andrés Alfredo Hernández, quienes enfrentaban una sentencia de 20 años cada uno, lograron acuerdos para pasar solo tres años de cárcel. Arturo Palencia pudo reducir su condena de 40 a 10 años, mientras que Wenceslao Tovar Jr. pasó de cadena perpetua a 20 años. La prisión de por vida que enfrentaría Raúl Castillo se transformó en 15 años de prisión.

Tras sendos acuerdos de total culpabilidad, Jorge Rodríguez logró una sentencia de 8 años, al tiempo que René García fue condenado a 12 años, luego de incumplir su libertad condicional. Richard Guerrero logró ser liberado y recibió trato de “testigo material”.

Pionero en este tipo de acuerdos, el capo Ociel Cárdenas Guillén fue condenado a 25 años de prisión.

Cárdenas Guillén: el precursor

En Estados Unidos, hay al menos mil 300 documentos en las cortes de Texas en contra de Los Zetas. Es ahí donde se pueden leer los testimonios de víctimas, rivales e integrantes de la organización delictiva que primero fuera una escisión del Cártel del Golfo que lideraba Ociel Cárdenas Guillén, uno de los narcotraficantes más sanguinarios de todos los tiempos; de hecho es a él, a quien se le atribuye el nacimiento de este cártel.

Y fue precisamente Cárdenas Guillén quien comenzó la tradición de Los Zetas de convertirse en testigos colaboradores a cambio de reducir sus sentencias. Y es que según los biógrafos de la organización criminal, en su mayoría la integran jóvenes sin trabajo o recursos, por lo que llegaron a las cortes sin un respaldo económico, caso diferente al del cártel de Sinaloa y el de los Arellano Félix que han entregado fortunas de millones de dólares cambio de libertad.

Cárdenas Guillén llegó a un acuerdo de culpabilidad en la Fiscalía Sur de Texas en el año 2010, que incluyó la entrega de información sobre la estructura criminal de los cárteles que él fundó, pero también de otras bandas rivales. Finalmente en 2015 logró una sentencia de apenas 25 años y que el sistema de prisiones mantuviera en secreto su ubicación hasta el día de su liberación.

En la misma corte, la del Distrito Sur de Texas, otros narcotraficantes de Los Zetas le han seguido los pasos a pesar de estar involucrados en actos que incluyen ritos satánicos, decapitaciones, secuestros, casas de seguridad, tráfico de drogas y lavado de dinero.



Uno de los que llegaron a acuerdos de cooperación fue Wenseslao Jr. Tovar, quien según el gobierno norteamericano trabajó directamente para Miguel Ángel Treviño, Z40, líder fundador de Los Zetas. La acusación en su contra revela que el hombre de 26 años, en ese entonces, participó en el secuestro de otro Zeta que habría estado filtrando información a una organización rival del cártel.

Wenseslao Jr. Tovar lo habría asesinado de un disparo cuando el hombre se negó a aceptar su secuestro. Según documentos judiciales de Estados Unidos, la Fiscalía pedía una sentencia de por vida, sin embargo, su defensa logró que a través de un acuerdo de cooperación el gobierno norteamericano lo sentenciara a pasar 20 años de prisión.

Y es que según un examen médico radicado en su expediente, el hombre había sufrido un accidente en una carretera de Tamaulipas y había quedado inmovilizado de la cintura para abajo, condición que ayudó a reducir su sentencia en 2012.

En el documento puede leerse que la defensa argumentó que los terribles dolores, las llagas en el cuerpo que le causa estar postrado a una cama o una silla de ruedas, harán que tenga una expectativa de vida corta. Además se ordenó que el hombre tenga todas las facilidades que la prisión pueda otorgarle, medidas de protección así como que reciba tratamiento de rehabilitación psiquiátrica.

Otro que gracias a un acuerdo de culpabilidad total solo está pasando una condena en prisión de 12 años es René García, La Rana, quien según el Departamento de Justicia viajó hasta el Río Bravo para conocer al Z40.

En este primer encuentro, el Z40 les entregaría una lista de objetivos y cinco mil dólares: miembros rivales que había que asesinar del Cártel de Sinaloa, que en ese entonces lideraba Joaquín El Chapo Guzmán. Con él estaba otro hombre llamado Andrés Alfredo Hernández.

Ambos acordaron entregar información, convertirse en testigos, testificar en cualquier proceso judicial que involucre a un integrante de Los Zetas. Andrés Alfredo llegó a un acuerdo aún más ventajoso: el solo se enfrentó a tres años en prisión y obtuvo su libertad cuando la Fiscalía había revelado que podía pedir hasta 20 años en su contra.

René García La Rana logró en 2008 que las autoridades le otorgaran el beneficio de libertad condicional. Sin embargo, según el sistema de cortes de Estados Unidos, violó las condiciones y fue detenido en una carretera de este país en marzo de este año, en Charlotte.



En ese entonces, la Fiscalía dijo que entre las armas que utilizaron para asesinar se encontraban una Smith and Wesson 9 mm, un AR-15 y una Glock .40 mm.

El acuerdo entre las autoridades e integrantes de Los Zetas también logró que un hombre llamado Roberto Camacho, quien trabajaba al mando de Gabriel Cardona Ramírez, jefe de sicarios zeta quien fraguó el secuestro de dos jóvenes norteamericanos: Jorge Alfonso Avilés, de 19 años, e Inez Villarreal, de 14, en un club nocturno de Nuevo Laredo el 30 de marzo de 2006.

Roberto Camacho trabajaba para Los Zetas traficando cocaína desde Tamaulipas hasta Nuevo Laredo. Otra de las labores de Camacho fue buscar casas de seguridad para asesinar a un hombre. Además que cruzó la frontera con más de 800 mil dólares. Fue sentenciado en el año 2009.

Según los documentos del caso, la Fiscalía advirtió que podía pedir hasta 20 años en contra de Camacho, sin embargo, luego de un acuerdo de culpabilidad total, el zeta llegó a un acuerdo que le permitió obtener su libertad en solo tres años. También aceptó rehabilitación de alcohol y drogas en prisión.

Entre los acuerdos incluso hay casos que incluyeron exculparlo del cargo de secuestro. Tal es el caso de un hombre llamado Richard Guerrero, quien según su acusación en Estados Unidos habría trabajado planeando un secuestro para Miguel Ángel Treviño Morales, el Z40.

Se hizo pasar por policía utilizando luces de patrulla, con esto logró interceptar a su víctima, quien creyó que lo estaba deteniendo una autoridad.

Guerrero logró que lo exculparan del cargo en 2008 y a cambio se convirtió en “testigo material” que acordó su liberación con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Otros que hicieron pactos con el gobierno fue el narcotraficante Arturo Palencia, quien traficó marihuana y armas con fines criminales para los zetas. De 40 años que la Fiscalía dijo podía pedir solo obtuvo 10 años. En su caso además del acuerdo total también se pidió su rehabilitación a las drogas y el alcohol en prisión. El acuerdo se alcanzó en 2008.

Lo mismo un zeta llamado Raúl Castillo, quien traficó cocaína y lavó dinero para el cártel. A través de un acuerdo en 2012, acordó una sentencia de 15 años en prisión, a pesar de que el día que firmó el acuerdo la Fiscalía advirtió que la pena podría alcanzar toda la vida en prisión y una multa de 4 millones de dólares.



Este escenario de acuerdos totales y reducciones de sentencias es al que se enfrenta el último zeta extraditado a Estados Unidos, Juan Gerardo Treviño Chavez, El Huevo, líder de una de las células criminales del Cártel del Noroeste y pariente de Miguel Ángel Treviño, el Z40, quien aún se encuentra en una prisión en México.

El Huevo enfrentará 11 cargos en su contra, entre los que se encuentran tráfico de drogas y lavado de dinero. Lo hará también en la Fiscalía del Distrito Oeste de Texas. ([Laura Sánchez Ley, Milenio, P.p.](#))

Mata por 10 mil, muere por 70

Para poder cubrir una deuda de 10 mil pesos que les debía a colombianos del grupo delictivo Gota a Gota y para evitar que estos extranjeros no atacaran sexualmente a su hija, el joven David “Z”, de 38 años, fue presionado para acompañar a dos sujetos para ultimar a Oscar Gabriel “V”, de 24 años, quien también les debía 70 mil pesos a esos mismos sujetos.

Las investigaciones de agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y de la Policía de Investigación señalan que David “Z” se encontraba en su domicilio, localizado en la calle Secretaría de la Alcaldía Gustavo A. Madero.

De manera repentina llegaron varios colombianos, a quienes les debía 10 mil pesos. Cuando les dijo que no tenía para pagarles y que lo esperaran, los extranjeros le empezaron a amenazar al grado tal de decirle que si no les pagaba iban a atacar sexualmente a su hija, al tiempo que le dijeron que, de lo contrario, tenía que ir a acompañar a dos sujetos para asesinar a otro, que también les debía 70 mil pesos.

Para ello, le explicaron que afuera de su casa estaba estacionado un vehículo Matiz color negro y que él tenía que abordarlo y pasar por dos sujetos más, ya que no tenía papeles y que tenía que llevar a esos sujetos para ir a calles de Tepito, porque iban tras un sujeto que “se lo iban a chingar” porque ese también les debía 70 mil pesos.

Ante las amenazas de los colombianos, David “Z”, de 38 años, salió de su casa, abordó el vehículo y paso por los dos sujetos. Luego de ello, se dirigieron a la Colonia Morelos.

Las investigaciones señalan que ingresaron al área común de una unidad habitacional localizada en la esquina de las calles Constancia y Toltecas, Colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc, donde encontraron a un sujeto a quién agredieron a puñaladas.



Ahí, lo dejaron mortalmente herido y se dieron a la fuga. En tanto que vecinos y testigos de este hecho de violencia de inmediato pidieron la intervención de personal de los cuerpos de socorro y de la policía. Debido a que no llegaban los cuerpos de emergencias, familiares del herido, identificado como Oscar Gabriel “V”, lo trasladaron de emergencia al hospital de urgencias Balbuena, donde en los momentos en que fue revisado por los médicos, diagnosticaron que ya había dejado de existir a consecuencia de las heridas ocasionadas con arma punzocortante.

Como parte de las investigaciones, policías uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México iniciaron la búsqueda del vehículo a través de las cámaras de videovigilancia del C-2 y, detectaron la ruta que tomó el automóvil, donde huyeron los homicidas.

Fue en el domicilio de David “Z”, donde el automóvil detuvo su marcha y descendió este. En ese lugar, policías preventivos implementaron un operativo en ese lugar donde se logró la captura del presunto homicida, David “Z”, el cual fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de Homicidios, donde dijo que colombianos del grupo delictivo Gota a Gota, a quienes les debe 10 mil pesos, lo obligaron a participar en el crimen en agravio del joven de la Colonia Morelos, quien les debía 70 mil pesos, ya que de lo contrario atacarían físicamente a su hija.

Las investigaciones ministeriales continúan y en las próximas horas se determinará la situación jurídica del presunto homicida, identificado como David “Z”. [\(Noel F. Alvarado, La Prensa, Cp\)](#)